



CSJ 2379/2017

ORIGINARIO

Honda Motor de Argentina S.A. c/
Córdoba, Provincia de s/ acción
declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 15 de octubre de 2024

Vistos los autos: "Honda Motor de Argentina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", de los que

Resulta:

I) A fs. 23/49 se presenta Honda Motor de Argentina S.A. e inicia acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Córdoba, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse frente a la pretensión de la demandada de someter a los ingresos brutos obtenidos por la actividad "Otras industrias manufactureras" (código 39000), a una alícuota diferencial más alta, en virtud de no contar con establecimiento industrial dentro de esa provincia.

Solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 18, inciso 2°, de la ley provincial 10.412 y de la pretensión impositiva fundada en esa norma: resolución DJRAF-R 0023/2017, del 9 de octubre de 2017 e intimación de la Dirección General de Rentas provincial, notificada el 16 de noviembre de ese mismo año. Sostiene que esa pretensión fiscal resulta violatoria de los artículos 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° a 12, 16, 17, 28, 31, 33, 75, incisos 1°, 2°, 10, 12, 13, 18 y 30, 125 y 126, todos de la Constitución Nacional.

Describe la actividad industrial de la empresa actora y dice que tributa el impuesto a los ingresos brutos bajo el régimen general del Convenio Multilateral.

Refiere que, pese a no estar de acuerdo con el tratamiento impositivo establecido en el art. 18 de la ley impositiva anual ya referida, pagaba los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos con apego a esa norma, mas, a partir

del período fiscal 5 de 2017, comenzó a abonar por la actividad industrial antes indicada, a la alícuota del 0,5%. Esto fue comunicado a la provincia demandada, quien, ante esa modificación, la intimó al pago de la suma de \$ 5.282.230.

Desarrolla las razones por las cuales, a su entender, se cumplen los requisitos de procedencia formal de la acción declarativa.

Aduce que la norma legal cuestionada y la pretensión provincial plasmada en las intimaciones antes referidas, resultan violatorias de principios y garantías constitucionales, a saber: de la igualdad ante la ley, de razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad, de la "cláusula comercial", de la prohibición de crear aduanas interiores y de la solidaridad federal.

Cita jurisprudencia del Tribunal en apoyo de su postura.

Por último, a fs. 53/58 adjunta la intimación "caso 8799-000010", emitida por la Dirección de Rentas provincial el 7 de diciembre de 2017.

II) A fs. 60 dictaminó la señora Procuradora Fiscal, y sobre la base de esa opinión, a fs. 68/69 el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa. A su vez, hizo lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio y a fs. 53/53 vta., por lo que dispuso, en resumen, que el Estado provincial debía abstenerse de reclamar a la accionante las diferencias pretendidas en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos que se desprendían de la resolución DJRAF-R 0023/2017 de la Dirección General de Rentas provincial y durante la vigencia de la ley impositiva anual 10.412, así como de aplicar o ejecutar multas o de trabar



Honda Motor de Argentina S.A. c/
Córdoba, Provincia de s/ acción
declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

cualquier medida cautelar administrativa o judicial sobre el patrimonio de la sociedad y sus directores; todo ello hasta tanto se dictara sentencia definitiva en estas actuaciones.

III) A fs. 150/181 la Provincia de Córdoba contesta la demanda y solicita su rechazo.

Tras las negativas de rigor, asegura que no se verifica la discriminación denunciada por el contribuyente, pues la provincia solo considera la actividad efectivamente desarrollada en su territorio, con abstracción del origen nacional o importado del producto. Destaca -entre otras cuestiones- que el objetivo de la medida fiscal es el de alentar y fomentar ciertas actividades, en la búsqueda de concretar la llamada cláusula del progreso o desarrollo a la que se refiere el artículo 75, inciso 18, de la Ley Fundamental.

Más adelante, alega que la actora "confunde la actividad principal realizada desde el punto de vista económico [...], con las actividades efectivamente realizadas en cada ámbito jurisdiccional...". También efectúa consideraciones sobre el hecho imponible y su regulación en el código tributario provincial.

Indica que la accionante no desarrolla actividad industrial en la Provincia de Córdoba sino "operaciones de comercialización de compra-venta, que indudablemente constituye un hecho imponible alcanzado por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos con una alícuota distinta de la contemplada para la actividad industrial".

En consecuencia, dice, la aplicación de la alícuota dispuesta para quienes no desarrollen actividad industrial en

la jurisdicción de la Provincia de Córdoba "no crea desigualdades entre los contribuyentes que están en similares condiciones o categorías...".

IV) A fs. 204 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 505/2012 (48-B)/CS1 "Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", donde opinó, en lo que aquí interesa, que correspondía hacer lugar a la demanda.

Considerando:

1º) Que, tal como lo ha decidido el Tribunal a fs. 68/69, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2º) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de la ley provincial 10.412, a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034).

En el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada, dirigida a la aplicación de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, la actividad desplegada por la autoridad provincial, de la que da cuenta la prueba documental agregada a la causa (ver resolución DJRAF-R 0023/2017, del 9 de octubre de



Corte Suprema de Justicia de la Nación

2017 -fs. 8/11- e intimaciones de la Dirección General de Rentas provincial, del 6 de noviembre y 7 de diciembre de ese mismo año, fs. 12 y 58, respectivamente), demuestra que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421, entre otros).

3°) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el *sub lite* presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que, por lo tanto, la aplicación de la ley impositiva que se cuestiona, en el caso concreto, al gravar la actividad antes referida de la actora con la alícuota del 4,75%, obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias.

5°) Que, en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados en las causas citadas en el considerando 3°, y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el *sub examine* queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto se lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16) y se altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de "aduana interior" vedada por la Ley Fundamental (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los

manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por Honda Motor de Argentina S.A. contra la Provincia de Córdoba. En consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de la distinción, en razón de la ubicación del establecimiento productivo donde se desarrolle la actividad industrial, establecida en el artículo 18 de la ley 10.412 de dicha provincia, como así también la de la pretensión fiscal plasmada en la resolución DJRAF-R 0023/2017 e intimaciones "caso 8739-000007" y "caso 8799-000010", todas de la Dirección General de Rentas provincial. Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.



CSJ 2379/2017

ORIGINARIO

Honda Motor de Argentina S.A. c/
Córdoba, Provincia de s/ acción
declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Parte actora: **Honda Motor de Argentina S.A.**, representada por **su letrado apoderado, Dr. Santiago Monti**, con el patrocinio letrado del **Dr. Felipe Carlos Stepanenko**.

Parte demandada: **Provincia de Córdoba**, representada por **sus letradas apoderadas, Dras. Leticia Valeria Aguirre y Sonia Laura Trinidad**, con el patrocinio letrado de la **Dra. Julia Enriquez**.